

Comités incómodos

Javier de Mendoza

En general, a los políticos no les gustan las críticas ni que otros les evalúen, o que profesionales independientes les digan lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal y, en ese caso, cómo tendrían que haber actuado. Si los comentarios proceden de otros políticos, no hay problema, se responde con el clásico “y tú más” y se sigue la vieja táctica de que la mejor defensa es un buen ataque, con descalificaciones, ninguneos o frases lapidarias, a la búsqueda de titulares contundentes. Y en nuestro país, por la crispación y polarización que se ha adueñado de la vida política, se lanzan rápidamente epítetos de “fascista” o “chavista”, con la misma energía, según el color político de quien sea atacado, aunque al final no suele ocurrir nada y la vida sigue su curso, cada uno a lo suyo. Sin embargo, cuando se trata de opiniones de científicos, la cosa es más compleja. Como ya he comentado en alguna ocasión, el conocimiento avanza a velocidades distintas, más rápidamente entre los científicos que entre quienes no lo son, de forma que la distancia que separa a los que saben de los que, sin saber, toman decisiones, se agranda constantemente de forma peligrosa. Muchos políticos saben poco o nada sobre la materia que tienen que gestionar, por haber sido nombrados por razones coyunturales, territoriales o por cuotas diversas, por lo que suelen rodearse de asesores a sueldo, a veces muy numerosos, nombrados a dedo, que le informan discretamente de la solución correcta, sin que nadie más se entere. Cuando el político no hace caso del asesor, porque piensa que lo que le propone es arriesgado, o que daña a su imagen o al partido, amenazando su futuro político, comete un craso error, como pretendo demostrar a continuación.

Los viejos funcionarios con experiencia suelen decir, con algo de ironía, que cuando un alcalde quiere hacer algo que deje su huella permanente en la ciudad, como un monumento, un auditorio o una infraestructura relevante, tiene dos caminos. El primero es convocar un concurso de ideas, eligiendo el mejor proyecto, aunque sea de un desconocido, y llevarlo a cabo. Es sin duda lo más honesto pero, desde el punto de vista político, lo más arriesgado si, tras ser inaugurada, la obra no gusta

a la gente o presenta problemas técnicos o de mantenimiento. ¿Quién te mandó a ti encargárselo a ese mindungui? le dirán todos. En cambio, si se lo encomienda (tras un concurso restringido, por invitación, o directamente a dedo) a alguien famoso, ya consagrado, se pone al abrigo de cualquier crítica posterior, aunque haya costado mucho más de lo inicialmente presupuestado o al poco tiempo se caiga a pedazos. A mí no me miréis, yo contraté al mejor, les dirá entonces. Ejemplos no faltan, mis sagaces lectores los habrán identificado al instante. Si eso es así, ¿por qué no hacer lo mismo con los asesores técnicos o científicos?

Tradicionalmente, cuando un asunto no interesa o no conviene que se resuelva de forma inmediata, se crea una comisión. Desde que la comisión se constituye, comienza sus trabajos, a menudo interrumpidos por largos períodos sin razón aparente, hasta que por fin emite sus conclusiones, el tema va perdiendo interés mediático y los políticos pueden abordar asuntos supuestamente más urgentes, al menos para ellos. Paradójicamente, cuanto más relevante sea un tema, más probable es que acabe perdido por alguna comisión. Las pensiones, la reforma electoral, la burbuja administrativa, la financiación autonómica o la mismísima reforma constitucional, aunque sea parcial, son ejemplos en mente de todos. Hay muchos más. También es justo señalar que, cuando un partido en el poder goza del apoyo parlamentario de una mayoría, se lanza a cualquier reforma sin buscar un mínimo consenso con los partidos de la oposición, y las posibles comisiones que se crean son meros floreros decorativos sin relevancia. El resultado es que cuando cambia la mayoría, la reforma se viene abajo y vuelta a empezar, como el día de la marmota. El ejemplo más sangrante, y que desgraciadamente nos afecta a todos de forma muy negativa, es el de la reforma educativa. No voy a narrar la serie de bandazos que la pobre educación ha sufrido en nuestro país a lo largo de los años, como una pelota que va y viene en un partido de tenis, porque son bien conocidos por todos, figurando las dos últimas reformas, las llamadas leyes Wert y Celaá, entre las más llamativas. Recuerdo, sin embargo, al menos dos intentos meritorios que intentaron escapar a esta dinámica diabólica. El primero tuvo lugar durante la dictadura franquista, aunque parezca mentira. Fue la Ley General de Educación de 1970 promovida por José Luis Villar Palasí (cuyo hermano Vicente era entonces mi profesor de Bioquímica en la Facultad de Farmacia de Barcelona, por lo que alardeábamos de tener un profesor hermano de un ministro), que estableció nada menos que la enseñanza obligatoria hasta los 14 años y creó la EGB, el BUP y la Formación Profesional, siguiendo las directrices de un famoso



J. de Mendoza

Catedrático jubilado de Química Orgánica
(Universidad Autónoma de Madrid).
Profesor Emérito, Instituto Catalán de Investigación Química
(ICIQ, Tarragona).
C-e: jmendoza@iciq.es

Libro Blanco que sirvió de guía para su redacción. Con sus indudables defectos, el hecho de que muchas de esas iniciativas perduren hoy en día, más allá de su tiempo político, es señal de que estuvo bastante bien. Se echan en falta más libros blancos en nuestros tiempos. Otra reforma, que ni siquiera vio la luz, fue el intento reciente del ministro Gabilondo, una iniciativa transversal que fue abortada rápidamente, ya en seno de la comisión creada al efecto. Los motivos de tanto fracaso educativo nunca fueron técnicos, sino ideológicos, relacionados con la libertad de los padres, la religión y la influencia de la iglesia católica o el supuesto adoctrinamiento partidista o identitario de la propuesta de turno. Y mientras, desde Pisa nos recuerdan con periodicidad irritante cuáles son las consecuencias.

¿Y qué decir del tema sanitario? Muchos países, no el nuestro, crearon comisiones técnicas de virólogos, inmunólogos, epidemiólogos y demás ...ólogos, pero sin políticos, que dijeron a sus gobiernos lo que tenían que hacer frente al Covid-19. Al tratarse de un virus nuevo y de comportamiento bastante impredecible, cometieron errores y aciertos, pero como buenos científicos supieron enmendar, a la luz de los nuevos conocimientos que iban surgiendo, por lo que el resultado global para quienes les hicieron caso fue mucho mejor que los que hicieron siempre lo que más convenía a sus gobernantes. Los ejemplos de Australia, Nueva Zelanda y otros gobiernos asiáticos son representativos. Y allí no se andan con tonterías. Por un pequeño brote (podría decir insignificante) en un hotel de Melbourne se interrumpió por unos días la presencia de espectadores en el Open de Australia de Tenis, que estaban asistiendo sin estar ni siquiera obligados a llevar mascarilla (qué envidia me daban al ver los partidos en la tele...). Pero lo más interesante, que permite comprobar el nivel de conocimiento y disciplina de la población, es que la norma obligatoria comenzaba a las 11 de la noche y se interrumpió un importante partido que se estaba disputando a esa hora para que los espectadores abandonaran el estadio y se pudiera reanudar el encuentro sin público en las gradas. Y más recientemente, un único caso en Nueva Zelanda, uno sólo, provocó el confinamiento inmediato de dos millones de habitantes.

Y mientras tanto, aquí discutíamos cómo salvar la Semana Santa sin que apareciera una cuarta ola de contagios, mirando las curvas de incidencia con el rabillo del ojo para ver si no les daba por subir de nuevo. El dilema entre sanidad y economía es obviamente muy relevante para la vida diaria de los ciudadanos, sobre todo para quienes han sido más maltratados por la pandemia, pero se trata de un falso dilema, ya que si bien ambos problemas, sanidad y economía, han aparecido casi a la vez, no se pueden resolver en paralelo, puesto que sin sanidad no hay economía que puede levantar el vuelo. A quienes suspiran por el regreso de los turistas (y yo, que vivo en Mallorca, soy testigo directo de ello) suelo preguntarles: ¿Tú te irías de vacaciones a Italia este próximo verano? Todos sin excepción me dicen que no. Y yo les pregunto

entonces ¿por qué crees pues que un inglés, un alemán o un italiano pensara en venir a España? Seamos claros, la recuperación será lenta, además de dolorosa para casi todos, pero primero hay que acabar con esta pesadilla.

Numerosos científicos han solicitado, mediante cartas publicadas en las mejores revistas, la creación de comités independientes (esa es la condición fundamental), que den directrices claras y sencillas de cumplir a los gobernantes y a la población. Las respuestas del gobierno ante estos escritos ha sido siempre “por supuesto” pero, transcurrido el tiempo, nadie ha movido un dedo en este sentido. Me recuerda a algunos mallorquines que, al despedirse tras cualquier conversación o negociación, sueltan un “te digo cosas” que significa literalmente que nunca jamás te llamarán para decírtelas. Es lo primero de lo que te informan cuando llegas a la isla. Eso sí, tenemos en España a un portavoz nacional de un supuesto comité, que ya se ha reconocido que no existe, que sale por televisión con frecuencia pero cuya hemeroteca no aguanta el mínimo análisis, dadas las contradicciones en las que ha incurrido. Y también tenemos 17 órganos, comités o simplemente dirigentes políticos en las Comunidades Autónomas, cuyas decisiones originan tantas contradicciones que pierden toda fuerza de convicción y provocan desconcierto y desobediencia entre los ciudadanos.

A medida que la población se vaya vacunando nos acercaremos al final de la pesadilla, pero ¿cuántos muertos nos costará todavía este drama y esta actitud? Las vacunas escasean, y las que hay no se administran siguiendo criterios siempre razonables. Yo mismo me considero población de alto riesgo, pues tengo ya 76 años, varias operaciones muy serias a cuestas, y un sinfín de medicamentos que tomo cada día disciplinadamente, y nadie me llama para vacunarme. Por si fuera poco, tengo el grupo sanguíneo A+ (horror!), y ni siquiera soy obispo, alcalde o alto cargo, sólo un simple jubilado. Y es que España sigue, en el momento de escribir estas líneas, con su decisión de no suministrar la vacuna de Oxford/AstraZeneca (la que ahora parece que abunda más) a los mayores de 55 años, en contra de lo que han decidido otros países europeos de primera magnitud. Un científico de Harvard se extrañaba recientemente de que en España ni siquiera se debatiera sobre este aspecto, mientras se dedican horas y horas a comentar la irresponsable vacunación de las infantas, llena de significado político pero irrelevante a todos los efectos. Sólo me queda pues recluirme en mi rincón, en espera de esa llamada, con mi opinión en las antípodas de lo que otros van decidiendo, y soñando cada vez más con esos ciudadanos y dirigentes de Nueva Zelanda a los que admiro y que también se encuentran en nuestras antípodas.

JAVIER DE MENDOZA

Catedrático jubilado de Química Orgánica (UAM)

Profesor Emérito, Instituto Catalán de Investigación Química

(ICIQ, Tarragona)